



Imagen de la macrodesaladora de Torrevieja, la más cara del Programa Agua que sustituyó al proyecto del trasvase del Ebro. LOINO

El Gobierno busca comprador para las desaladoras de Torrevieja y Mutxamel aún sin inaugurar

► El Ejecutivo quiere privatizar el servicio ante la falta de demanda de agua desalada, por ser muy cara, y el coste multimillonario del mantenimiento de estas infraestructuras ► Las dos plantas que están acabadas, pero no han entrado en funcionamiento, costaron casi quinientos millones de euros

F. J. BENITO

■ Un plan que hace aguas. Un año después de que el Ministerio de Agricultura desprogramara la construcción de las desaladoras que quedaban pendientes de construir del Programa Agua de la exministra Cristina Narbona (Guardamar, Dénia y ampliación de Xàbia), el Gobierno busca ahora compradores para las plantas de Mutxamel y Torrevieja, en las que se ha invertido casi 500 millones de euros, que están acabadas, pero no funcionan, ya que no tienen usuarios por el alto precio del agua desalada y lo caro que es su mantenimiento. Son los casos de la macrodesaladora de Torrevieja, con una producción prevista de 80 hm³, y de la de Mutxamel, que estaba prevista para garantizar el suministro del no menos polémico Plan Rabasa de Alicante, y el auxilio de Benidorm en los casos de emergencia. Una situación, ésta última, difícil de producirse debido a la buena gestión del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.

Hoy, en pleno ajuste económico

del Gobierno central, la gestión pública de las plantas de Torrevieja y Mutxamel se antoja imposible, de ahí que el ministerio busque inversores privados, que podrían salir de las empresas que gestionan el abastecimiento hídrico de las ciudades.

Una alternativa que, de llevarse, a cabo disparará el precio del recibo del agua y, además, complicará el futuro de la agricultura, que no puede ni acercarse a las tarifas del agua desalada para regar sus campos. En estos momentos, la titularidad de las plantas pertenece a la sociedad estatal Acuamed, la misma que tiene que solucionar los problemas de filtraciones del embalse del Júcar-Vinalopó, pero el Gobierno aspira a ceder la gestión del agua, que no la titularidad de los recursos, a la iniciativa privada.

Según un informe de la Conselleria de Agricultura, si el Gobierno central hubiera puesto en marcha todas las desaladoras y volcado en la red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla los recursos obtenidos por esta vía -casi 130 hm³-, las

La opción que se estudia es que la red de plantas sea asumida por las empresas que gestionan el abastecimiento

tarifas se habrían disparado, generando graves tensiones entre los 80 ayuntamientos que abastece.

Por lo tanto, uno de los motivos del fracaso de este plan de desalación ha sido el alto precio del agua, que ha de trasladarse a los usuarios o ser subvencionado por el Estado. Para que el recurso generado sea viable, los usuarios han de ser capaces de pagar su coste. La debilidad del programa de desalación es que se pretendió generar caudales para el regadío con un procedimiento de costes absolutamente inasumibles por los regantes, según el Consell.

En su momento se aseguró que el precio para el agricultor sería de 0,30 euros/m³, lo que es del orden de la tercera parte del coste real. Esto significa que solo podría aprove-

charse el agua mediante una cadena de subvenciones públicas para hacer viable su uso. Según la Conselleria de Agricultura, en el caso de la planta de Torrevieja, el 50% del agua deberá destinarse al regadío, pero su elevado coste hace que el agricultor en ningún caso pueda asumir el coste de explotación. El otro 50% del caudal generado se destinará a abastecimiento, que, de materializarse, supondría una elevación de tarifas del 35% para los usuarios del Taibilla, que abastece a 34 municipios de la provincia. Toda la Vega Baja, Alicante, Elche, Crevillent, Santa Pola, San Vicente, Agost, Aspe y Hondones.

En este sentido, Ángel Urbina, portavoz de la Federación de Regantes lo tiene claro. «Es una cuestión de Estado, un error del Gobierno español, entonces en manos de los socialistas, que buscaron una solución que se ha demostrado que no es viable. No podemos ser los alicantinos los que paguemos los platos rotos y nos tiremos toda la vida pagando el agua más cara».

POCA EFECTIVIDAD

El Programa Agua solo aporta el 7% del caudal que se anunció

► El Programa Agua que sustituyó al proyecto del trasvase del Ebro solo aporta un 7% del caudal previsto de agua desalada (unos 40 hm³ de los 175 hm³) e, incluso, una desaladora, la de Agua Amarga (Alicante II), funciona a la mitad de su capacidad. El precio medio del agua desalada del mar está actualmente de media en los 0,8 euros/m³ a pie de planta, mientras que la del trasvase del Tajo llega a 0,2 euros, un precio todavía caro para los agricultores, pero muy bueno para los ayuntamientos.

En septiembre de 2004, el Gobierno de Zapatero presentó el programa de la desalación como la gran alternativa al trasvase del Ebro. Según la ministra Narbona, el plan estaba dirigido a lograr una mejora de la gestión y reutilización del agua, contribuyendo a una mejor calidad de ésta, así como de los ecosistemas asociados, incrementando la oferta de recursos hídricos obtenidos de forma sostenible. Al final un desastre.

LA CIFRA

492 MILLONES

Un dato que sobrecoge en plena etapa de ajuste público

► El dato lo reveló hace unos días en las Cortes la consellera Isabel Bonig. Las desaladoras han costado 492 millones de euros y hoy, según sus propias palabras, no las quiere nadie.